**MEMORANDO**

PARA: **LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO**

Secretaria General

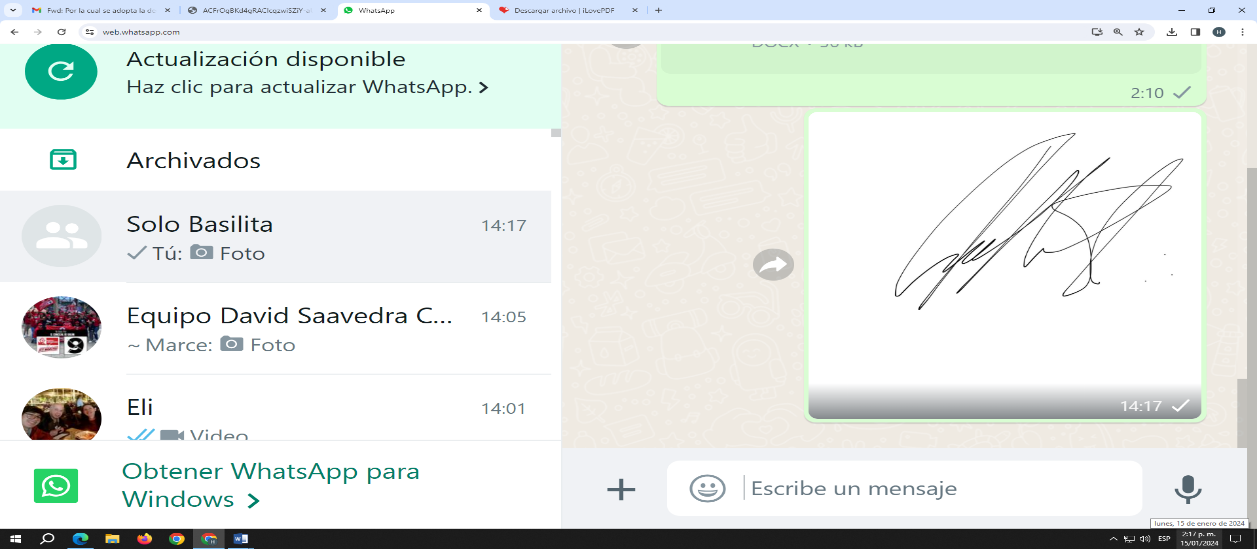
DE: **H.C. DAVID HERNANDO SAAVEDRA MURCIA**

ASUNTO: Presentación Proyecto de Acuerdo

Estimada Secretaria

Teniendo en cuenta el Reglamento Interno del Concejo de Bogotá y para efectos de llevar a cabo las competencias que el mismo otorga, presento ante usted el siguiente Proyecto de Acuerdo**“Por el cual se exalta la trayectoria de Jaime Garzón y su impacto en la cultura de la ciudad, con el fin de aportar al deber que tiene el Distrito Capital para la recuperación, el fortalecimiento, la promoción de la memoria histórica, la paz y la reconciliación en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”**

Agradeciendo de antemano su atención,



**H.C. DAVID HERNANDO SAAVEDRA MURCIA**

Concejal de Bogotá

**PROYECTO DE ACUERDO No. \_\_\_\_\_ DE 2025**

**“Por el cual se exalta la trayectoria de Jaime Garzón y su impacto en la cultura de la ciudad, con el fin de aportar al deber que tiene el Distrito Capital para la recuperación, el fortalecimiento, la promoción de la memoria histórica, la paz y la reconciliación en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

1. **OBJETO DEL PROYECTO**

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objeto rendir homenaje a Jaime Garzón, Bogotano quien en vida y mediante su trabajo impactó en la cultura, la política y la identidad capitalina. Igualmente, se pretende aportar al deber de memoria que tiene el Estado por cuanto Jaime Garzón fue asesinado y este hecho fue declarado un crimen de lesa humanidad, por lo que es necesario desde el Concejo de Bogotá D.C. conservar el recuerdo de forma tangible de este ilustre ciudadano y establecer medidas que aporten a la memoria del país desde una dimensión colectiva para evitar que en el futuro estos hechos vuelvan a reproducirse.

1. **SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA.**

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA**

**ARTICULO 2.** Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (…).

**ARTICULO 20.**Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación (…)

**ARTICULO 70.** El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

**ARTICULO 73.**La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional.

**LEY 975 DE 2005,** *Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.*

**ARTÍCULO 8. DERECHO A LA REPARACIÓN.** El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

(…)

**Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica**, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.

Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley.

**ARTÍCULO 56. DEBER DE MEMORIA.** El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la memoria histórica que corresponde al Estado.

**LEY 1448 DE 2011,** *Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.*

**ARTÍCULO 25. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL.** Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley.

La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y **simbólica**. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante.

**ARTÍCULO 143. DEL DEBER DE MEMORIA DEL ESTADO.** El deber de Memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan **avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria** como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto.

**ACUERDO DISTRITAL 370 DE 2009,** *Por medio del cual se establecen en el Distrito Capital, los lineamientos y criterios para la formulación de la Política Pública a favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.*

**ARTÍCULO 2. De la política pública.**La política pública a favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, tiene como objeto diseñar e implementar un modelo de atención integral que les garantice el restablecimiento de sus derechos, como elemento fundamental para el proceso de reconciliación nacional.

**ACUERDO 784 DE 2020**, *Por el cual se establecen medidas para la recuperación, el fortalecimiento y la promoción de la memoria histórica, la paz y la reconciliación en Bogotá D.C. y se dictan en otras disposiciones.*

**ARTÍCULO** **6.- Recorridos y apropiación colectiva de los ejes de la memoria y la paz en Bogotá.**La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en coordinación con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, diseñarán una estrategia de recorridos guiados a los ejes de la memoria y la paz de Bogotá, en donde se informe a la ciudadanía sobre el valor histórico y la importancia de dichos lugares en la construcción colectiva de una cultura de paz y reconciliación.

**Parágrafo.** Respecto de estos mismos lugares, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá generará una herramienta de georreferenciación por medios físicos y virtuales que permita el amplio acceso de la ciudadanía a información sobre el vínculo de estos lugares con hechos históricos de relevancia para la construcción colectiva de memoria y una cultura de paz y reconciliación.

**DECRETO 462 DE 2011**, *"Por el cual se ordena la implementación del Programa de Prevención, Asistencia, Atención, Protección y Reparación Integral a las Víctimas, en cumplimiento de lo estipulado por el artículo 174 de la Ley 1448 de 2011, y se dictan otras disposiciones"*

**Artículo 10°. DERECHO A LA VERDAD Y MEMORIA HISTÓRICA.** Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos, las circunstancias y los motivos que llevaron a la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, y la perpetración de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Al efecto, la Administración Distrital propiciará las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad y a la paz de los que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto.

**Parágrafo.** En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política.

**JURISPRUDENCIA.**

El siguiente argumento es tomado del proyecto de Acuerdo Distrital No. 222 DE 2023 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXALTA LA MEMORIA DE DIEGO FELIPE BECERRA LIZARAZO Q.E.P.D. Y SE DICTAN DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS”:

*“Es importante resaltar que, el derecho a la memoria es parte integrante de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y se constituye en un requisito fundamental para lograr la reconciliación en la sociedad. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos. En la sentencia T - 418 de 2015 afirmó categóricamente que:*

*“Las víctimas tienen derecho a la verdad, la cual es definida como “la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real”. El derecho a la verdad tiene una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva”, y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte. En este sentido, el derecho a conocer la verdad presenta una faceta subjetiva en cuanto a que, independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas, así como sus familias y allegados, tienen derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima”.*

*Como también en la sentencia T-564 de 2016 consideró que:*

*“La dimensión colectiva del derecho a la verdad, por su parte, significa que la sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la divulgación pública de los resultados de las investigaciones, e implica la obligación de contar con una “memoria pública” sobre los resultados de estas investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos (…)”*

El llamado derecho a la memoria también es descrito por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-653 de 2012:

*“El derecho a la memoria ha sido estudiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aclarando su alcance. En su jurisprudencia –como en el caso de los 19 Comerciantes- ha ordenado a los Estados adoptar medidas para la preservación de la memoria de las víctimas como parte de la reparación y también ha ordenado medidas para la preservación de la memoria histórica. La Corte Interamericana ha distinguido esas dos dimensiones del derecho: por un lado, aquella cuya la finalidad es contribuir a resarcir a los individuos afectados con la violación de los derechos humanos y, por otro, la que* ***busca la no repetición de tales violaciones.*** *Hay, entonces, un aspecto individual y otro colectivo de este derecho. Esta diferencia quedó establecida claramente, por ejemplo, en el caso Anzualdo Castro vs. Perú, en el que consideró que la construcción del Museo de la Memoria, si bien era significativa en la edificación de la memoria histórica y como medida de no repetición, no lo era como medida individual de satisfacción y se ordenaron otras de carácter individual.* ***En su dimensión colectiva, el ejercicio de la confrontación con el pasado debe estar llamado a superar memorias generales irracionales que justifican actos contrarios a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario****. Debe contribuir a salvar tópicos como “algo habrán hecho” o “fue legítimo en medio de esta guerra”, en los cuales las víctimas terminan siendo culpables de su propia desgracia o, en el mejor de los casos, efectos colaterales que se justifican en el contexto del conflicto. Por otro lado, la memoria de la víctima debe servir para evitar, parafraseando a Theodor Adorno, que los muertos hayan de ser también timados en lo único que nuestra inconciencia les puede regalar: la memoria. Ante los graves hechos generados por la violación de derechos humanos, una parte de la reparación debe consistir en que a las víctimas se les reconozca como tal; en su individualidad no deben pasar a la posteridad como perpetradores sino como receptores de graves ofensas, personas inocentes que perdieron su vida, sus familias, sus tierras o sus proyectos de vida por cuenta del injusto trato de otros.”* (resaltado fuera del original)

1. **JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA**

Es importante recordar a Jaime Garzón como un miembro de la sociedad Bogotana que ha impactado la vida de sus habitantes e invitado a reflexionar sobre los problemas del país. Si bien la obra de Garzón se aprecia en todo el territorio nacional, indiscutiblemente en Bogotá se sitúa su mayor legado, al ser esta la ciudad donde nació, se educó, ejerció la docencia, el derecho, participó en política durante la campaña a la Alcaldía de Andrés Pastrana Arango, fue alcalde menor de Sumapaz (Escobar Roldan, 2014), cargo del cual fue destituido pero posteriormente reintegrado por orden del Consejo de Estado que determinó que Garzón sí había cumplido con su deber y que por lo tanto su despido no era justo («GARZÓN, AL GOBIERNO POR UN DÍA», 1999). También participo en el proceso de traducción a lenguas indígenas de la Constitución Política de 1991 bajo la presidencia de Cesar Gaviria, desarrollo su trabajo como periodista, así como humorista político para programas de televisión. Finalmente, es en esta ciudad donde desafortunadamente es asesinado, y llorado por su familiares y ciudadanos que masivamente acompañaron su féretro.

La influencia de Jaime Garzón se encuentra vigente en Bogotá luego de 24 años de su partida. Desde los múltiples murales que recuerdan su imagen en varios puntos de la ciudad, la estatua que se levanta en el lugar donde fue asesinado, colegios que llevan su nombre e incluso hasta en la gastronomía capitalina existe un plato llamado el “arroz Garzón” (del cual él mismo fue autor) en el restaurante El Patio, ubicado en el tradicional barrio bogotano de La Macarena («Al interior del restaurante favorito de Jaime Garzón», 2014).

Dentro del Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, podemos encontrar los siguientes aspectos relacionados con la construcción y conservación de la memoria local que contribuyan a la reconciliación y la comprensión sobre el conflicto armado en Bogotá: **El programa 13. “Bogotá, un territorio de paz y reconciliación en donde todos puedan volver a empezar”**, buscará fortalecer el esclarecimiento, la construcción de memoria histórica y la reflexión sobre las graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH ocurridos en la ciudad en el marco del conflicto. Igualmente, este Plan Distrital de Desarrollo contiene dentro de sus **metas de producto, la numero 128,** que busca “Desarrollar 81 procesos de investigación memoria y verdad como aporte a la reconciliación en Bogotá”. Consecuentemente, este Proyecto de Acuerdo ayudaría a desarrollar uno de los programas y una de las metas del vigente Plan Distrital de Desarrollo.

1. **MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTA**

En cuanto a la competencia que tiene el Concejo de Bogotá para aprobar esta iniciativa, esta se ampara en el Decreto Ley 1421 de 1993, que establece al Concejo de Bogotá como la suprema autoridad del Distrito Capital y habilitado para para dictar este tipo de normas:

**Decreto Ley 1421 de 1993**

***ARTICULO 3o. OBJETO****. El presente estatuto político, administrativo y fiscal tiene por objeto dotar al Distrito Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio; y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.*

*Las disposiciones del presente estatuto prevalecen sobre las normas legales de carácter general vigentes para las demás entidades territoriales.*

***Artículo 12:*** *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

*1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

**Acuerdo 741 de 2019** “Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, Distrito Capital”.

*“****Artículo 65.*** *Iniciativa. Los proyectos de Acuerdo pueden ser presentados por los Concejales individualmente, a través de las Bancadas, de manera integrada con otros Concejales o bancadas y por el Alcalde Mayor, por medio de sus Secretarios, Jefes de Departamento Administrativo o Representantes Legales de las Entidades Descentralizadas.*

1. **IMPACTO FISCAL**

El Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, señala respecto al impacto fiscal de las normas:

*“ARTÍCULO 7. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financia-miento de dicho costo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces”*

Sobre el cumplimiento de esta norma, varios fallos de la Corte Constitucional, como la sentencia C-307 de 2004, reiterada por la sentencia C-502 de 2007, señalan:

*“Las normas contenidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un importante instrumento de racionalización de la actividad legislativa, con el fin de que ella se realice con conocimiento de causa de los costos fiscales que genera cada una de las leyes aprobadas por el Congreso de la República. También permiten que las leyes dictadas estén en armonía con la situación económica del país y con la política económica trazada por las autoridades correspondientes. Ello contribuye ciertamente a generar orden en las finanzas públicas, lo cual repercute favorablemente en la estabilidad macroeconómica del país. De la misma manera, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mencionado art. 7° ha de tener una incidencia favorable en la aplicación efectiva de las leyes, ya que la aprobación de las mismas solamente se producirá después de conocerse su impacto fiscal previsible y las posibilidades de financiarlo. Ello indica que la aprobación de las leyes no estará acompañada de la permanente incertidumbre acerca de la posibilidad de cumplirlas o de desarrollar la política pública en ellas plasmada. (...) Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda. Y en ese proceso de racionalidad legislativa la carga principal reposa en el Ministerio de Hacienda, que es el que cuenta con los datos, los equipos de funcionarios y la experticia en materia económica. Por lo tanto, en el caso de que los congresistas tramiten un proyecto incorporando estimativos erróneos sobre el impacto fiscal, sobre la manera de atender esos nuevos gastos o sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para ilustrar al Congreso acerca de las con-secuencias económicas del proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y valorar el concepto emitido por el Ministerio. No obstante, la carga de demostrar y convencer a los congresistas acerca de la incompatibilidad de cierto proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo recae sobre el Ministro de Hacienda.”*

Teniendo en cuenta lo anterior, los gastos que se generen por lo dispuesto en el presente acuerdo en lo referente a la instalación de un mosaico en las instalaciones del Concejo de Bogotá D.C., se asumirán con cargo al presupuesto del Fondo Cuenta del Concejo. Sobre las otras disposiciones, las mismas no genera gasto ni genera costos fiscales adicionales para el Distrito en la medida que se pretenden articular los esfuerzos de las diferentes instituciones involucradas en la defensa y promoción de la memoria histórica de la capital.

1. **CONCLUSIÓN**

En mérito de lo expuesto y de conformidad con el Capítulo IX del Acuerdo 741 de 2019, nos permitimos presentar a su consideración el presente proyecto de acuerdo, para su trámite y aprobación.

Respetuosamente,

**DAVID HERNANDO SAAVEDRA MURCIA**

Concejal de Bogotá D.C.

Autor

**PROYECTO DE ACUERDO No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE 2025**

**“Por el cual se exalta la trayectoria de Jaime Garzón y su impacto en la cultura de la ciudad, con el fin de aportar al deber que tiene el Distrito Capital para la recuperación, el fortalecimiento, la promoción de la memoria histórica, la paz y la reconciliación en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”**

**EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO 1.- OBJETO.** El presente Acuerdo tiene como objeto rendir homenaje a Jaime Garzón dictando medidas para destacar su impacto cultural en la identidad de la ciudad y aportar al deber de memoria que tiene el Estado para la construcción de memoria histórica.

**ARTÍCULO 2.- RECORRIDOS GUIADOS.** La Administración Distrital incluirá en sus recorridos guiados a los ejes de la memoria y la paz de Bogotá, realizados en el marco del Acuerdo 748 de 2020, uno o varios recorridos que muestren los lugares emblemáticos donde Jaime Garzón impactó en la cultura y la identidad bogotana.

**Parágrafo:** Estos recorridos deberán incluir como mínimo una visita al Sumapaz, la Universidad Nacional, la estatua de Jaime Garzón en el barrio Quinta Paredes y al Concejo de Bogotá en donde se explicará a los visitantes el papel que tiene esta corporación para aportar al derecho a la verdad y memoria histórica de las víctimas.

**ARTÍCULO 3.- INSTALACIÓN MOSAICO.** En el Concejo de Bogotá se instalará un mosaico en homenaje a Jaime Garzón en la pared de alguno de los costados de la plazoleta Jorge Eliecer Gaitán.

**Parágrafo:** Los gastos que se generen por la instalación de esta obra, se asumirán con cargo al presupuesto del Fondo Cuenta del Concejo.

**ARTÍCULO 4.- VIGENCIA.** El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**BIBLIOGRAFIA**

Escobar Roldan, M. (2014). Jaime, un alcalde descarriado. *El Tiempo*. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14376759>

GARZÓN, AL GOBIERNO POR UN DÍA. (1999). *El Tiempo*. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-916598>

Al interior del restaurante favorito de Jaime Garzón. (2014). Kienyke.Com. Disponible en: <https://www.kienyke.com/historias/al-interior-del-restaurante-favorito-de-jaime-garzon-0>